

## RESOLUCION N. 00037

### “POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

#### LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009 y en especial, las facultades delegadas por la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021, de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

#### CONSIDERANDO

##### I. ANTECEDENTES

Que el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA-, en adelante el Departamento, el día 27 de enero de 2004, practicó visita técnica a la estación de servicio de la empresa unipersonal denominada “*DISTRIBUIDORA DIESEL MARTI-SOTE. E.U.*”, ubicada en la carrera 105 No. 73 SUR -04, finca EL VOLCAN, (Nueva Dirección: Carrera 92 No. 73 Sur -18), de la localidad de Bosa, en la ciudad de Bogotá D.C., de la cual se emitió el Concepto Técnico 0055 del 4 de enero de 2005, conforme a cuyas observaciones, la estación de servicio no ha registrado solicitud y no tiene permiso de vertimiento, no se encontraron pozos de monitoreo, hay un tanque de almacenamiento con capacidad de 3000 galones de Diesel el cual estaba enterrado y no existe impermeabilización de suelos, entre otros.

Que con base en las observaciones contenidas en el Concepto Técnico 0055 del 4 de enero de 2005, el Departamento, mediante Auto 832 del 1 de abril de 2005, inició procedimiento sancionatorio ambiental y formuló cargos contra “*el establecimiento denominado DISTRIBUIDORA DIESEL MARTI-SOTE. E.U., ubicado en la carrera 105 No. 73 SUR -04, finca EL VOLCAN (Paradero de Buses), de la localidad de Bosa, de esta ciudad (Nueva Dirección: Carrera 92 73 Sur -18), a través de su representante legal o quien haga sus veces, por los hechos*”

que da cuenta el concepto técnico No. 0055 del 4 de Enero de 2005 (...), por el presunto incumplimiento de la Resolución DAMA 1170 de 1997, por medio de la cual se dictan normas sobre estaciones de servicio e instalaciones afines; Resolución DAMA 1074 de 1997 de 1997, por la cual se establecen estándares ambientales en materia de vertimientos y la Resolución DAMA 2069 del 2000, por la cual se adopta una guía ambiental para estaciones de servicio. Acto notificado por Edicto fijado entre el 22 y el 25 de diciembre de 2005.

Que con base en las observaciones contenidas en el Concepto Técnico 0055 del 4 de enero de 2005, el Departamento, mediante Resolución 836 del 1 de abril de 2005, impuso “*al establecimiento denominado DISTRIBUIDORA DIESEL MARTI-SOTE. E.U., ubicado en la carrera 105 No. 73 SUR -04, finca EL VOLCAN (Paradero de Buses), de la localidad de Bosa, de esta ciudad (Nueva Dirección: Carrera 92 73 Sur -18) (...)*” medida preventiva de suspensión de actividades de vertimientos.

Que mediante comunicación con radicado 35576 de 10 de agosto de 2006, el administrador de la estación de servicio denominada “DISTRIBUIDOR DIESEL MARTI-SOTE E.U.” solicitó una prórroga de la medida preventiva, mientras continuaban adelantando las obras y acciones recomendadas.

Que el Departamento el 19 de septiembre de 2006, efectuó visita de seguimiento a la estación de servicio de la empresa unipersonal denominada “DISTRIBUIDORA DIESEL MARTI-SOTE. E.U.”, ubicada en la carrera 105 No. 73 SUR -04, finca EL VOLCAN, (Nueva Dirección: Carrera 92 73 Sur -18), de la localidad de Bosa, en la ciudad de Bogotá D.C., la cual se encontraba fuera de operación, sin embargo no había dado cumplimiento a las obligaciones impuestas en Resolución 836 del 1 de abril de 2005, que impuso la medida preventiva de suspensión de actividades, conforme a las observaciones contenidas en el Concepto Técnico 7424 del 10 de octubre de 2006, contenido de los resultados de la señalada vista.

## II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Sea lo primero aclarar que el sujeto de derecho objeto de la investigación sancionatoria ambiental adelantada en el expediente SDA-08-2006-1792, corresponde a la empresa unipersonal denominada “DISTRIBUIDORA DIESEL MARTI-SOTE. E.U.”, ubicada en la carrera 105 No. 73 SUR -04, finca EL VOLCAN, (Nueva Dirección: Carrera 92 73 Sur -18), de la localidad de Bosa, en la ciudad de Bogotá D.C., conforme a su razón social “E.U”.

Es así como la Ley 222 del 20 de diciembre de 1995, por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales entre otros, en su artículo 71, define la empresa unipersonal en los siguientes términos:

**“ARTICULO 71. CONCEPTO DE EMPRESA UNIPERSONAL.** *Mediante la Empresa Unipersonal una persona natural o jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil.*

*La Empresa Unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica.*

*PARAGRAFO. Cuando se utilice la empresa unipersonal en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, el titular de las cuotas de capital y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados.*

Por su parte el artículo 71 de la señalada norma, sobre los requisitos de formación de la empresa unipersonal, señala dentro de estos, los siguientes:

**“ARTICULO 72. REQUISITOS DE FORMACION.** *La Empresa Unipersonal se creará mediante documento escrito en el cual se expresará:*

- 1. Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del empresario;*
- 2. Denominación o razón social de la empresa, seguida de la expresión "Empresa Unipersonal", o de su sigla E.U., so pena de que el empresario responda ilimitadamente. (Subrayado fuera de texto)*

*(...)"*

En este orden de ideas, de acuerdo a lo establecido en los citados artículos de la Ley 222 del 20 de diciembre de 1995, es claro que el establecimiento de comercio **“DISTRIBUIDORA DIESEL MARTI-SOTE. E.U.”**, pertenece a una empresa unipersonal, sin embargo, consultado el Registro Único Empresarial – RUES-, no se halló información de la referida empresa.

Aclarado lo anterior, es pertinente señalar que la situación irregular que dio origen al inicio de investigación administrativa ambiental mediante Auto 832 del 1 de abril de 2005, contra *“[el establecimiento denominado DISTRIBUIDORA DIESEL MARTI-SOTE. E.U., ubicado en la carrera 105 No. 73 SUR -04, finca EL VOLCAN (Paradero de Buses), de la localidad de Bosa, de esta ciudad (Nueva Dirección: Carrera 92 73 Sur -18) (...)"* en la ciudad de Bogotá D.C., fue establecida por el Departamento, el día de la vista técnica del 27 de enero de 2004, lo que dio lugar al Concepto Técnico 0055 del 4 de enero de 2005, que sirvió de insumo técnico al referido acto, todo esto con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1333 de julio 21 de 2009, Por lo tanto, la normativa aplicable a la presente investigación, es la prevista en el Decreto 01 de 1984, la Ley 99 de 1993 y Decreto 1594 de 1984, con forme a lo previsto en el régimen de transición establecido en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, Régimen Sancionatorio Ambiental.

Es así, como el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, Régimen Sancionatorio Ambiental, prescribe:

**“ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS.** *El procedimiento dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984.”*

En este sentido, en materia procesal y de cara a la transición de procedimientos previstos en el artículo 64 de la ley 1333 de 2009, se advierte que, para el presente caso se surtió la etapa de inicio con posterioridad a la entrada en vigor de la ley en mención, razón por la cual se concluye que en el sub júdice es aplicable el procedimiento establecido en dicha normatividad.

En efecto, las normas procesales son de aplicación inmediata, salvo que el Legislador establezca una excepción. Al respecto, el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, dispuso:

*"Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.*

*Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones". (...)*  
*(Subrayado y negrillas fuera de texto).*

Teniendo en cuenta lo anterior, debe tenerse presente que la naturaleza del hecho irregular que dio lugar al proceso sancionatorio ambiental, es el punto de referencia y de partida para el cómputo de la caducidad, lo cual significa que, por tratarse de un hecho de ejecución instantánea, la caducidad opera desde el mismo momento de su ocurrencia o desde la fecha en que la autoridad ambiental tuvo conocimiento del suceso, tal y como lo ha reafirmado en múltiples pronunciamientos la doctrina y la jurisprudencia.

Así las cosas, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se concluye que el Departamento conoció del hecho irregular el **27 de enero de 2004**, fecha para la cual no se encontraba vigente la Ley 1333 de 2009, cuyo artículo 10 estableció un término de caducidad de 20 años, en su lugar, regía el **artículo 38 del Decreto 01 de 1984**, que fijó el término de caducidad de la facultad sancionatoria en **tres (3) años**.

En definitiva, al amparo del **DEBIDO PROCESO** y del **PRINCIPIO DE LEGALIDAD** a que se refiere el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se concluye que si se trata de un hecho de ejecución instantánea o de ejecución continuada cuyo último acto se haya materializado ANTES del 21 de julio de 2009, el término de caducidad comenzó a correr al amparo del artículo 38 del Decreto 01 de 1984 (3 años), como en el sub lite, pues se trata de hechos irregulares acaecidos antes de que entrara en vigencia la caducidad del artículo 10 de la Ley 1333 de 2009, no siendo viable jurídicamente aplicar en forma retroactiva la caducidad de veinte (20 años) prevista en dicha norma.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que a más de ser la caducidad en términos generales un fenómeno jurídico de carácter procesal, en materia administrativa genera la pérdida de competencia de la Administración para resolver sobre un determinado asunto, de suerte que dar

aplicación retroactiva a la caducidad de 20 años prevista en la Ley 1333 de 2009 respecto de situaciones que se consumaron antes de su entrada en vigor, implicaría desconocer la máxima del debido proceso constitucional, a cuyo amparo *“nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente”*, y soslayar por completo el principio de legalidad que rige por excelencia las actuaciones administrativas.

Al respecto, es necesario indicar, que la caducidad de la acción reviste carácter de orden público, pues su establecimiento obedece a razones de interés general que imponen la obligación de obtener en tiempos breves la definición de ciertos derechos, lo que le otorga dinámica a la actividad administrativa, al paso que le imprime un importante grado de seguridad jurídica. Ahora bien, en materia sancionatoria, impide toda posibilidad de iniciar o proseguir una determinada actuación, dado que se trata de una institución procesal que ataca el derecho de acción, cuyo efecto inmediato es la imposibilidad de su ejercicio.

Así entonces, en relación con la disyuntiva que impone analizar si debe o no darse aplicación retroactiva, en el caso que nos ocupa, al término de caducidad de los 20 años previsto en la Ley 1333 de 2009, se deben analizar las disposiciones contenidas en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012; atendiendo las reglas generales de interpretación ante conflictos derivados de la aplicación de la ley procesal en el tiempo, las mismas que permiten concluir que en el presente caso el término de caducidad a aplicar es señalado en el **artículo 38 del Decreto 01 de 1984**.

Frente al fenómeno de la caducidad, la H. Corte Constitucional, mediante Sentencia T-433, de la Sala Sexta de Revisión de fecha 24 de junio de 1992, ha dicho:

*“Consiste la caducidad en el fenómeno procesal de declarar extinguida la acción por no incoarse ante la jurisdicción competente dentro del término perentorio establecido por el ordenamiento jurídico para ello. Opera la caducidad ipso jure, vale decir que el juez puede y debe declararla oficiosamente cuando verifique el hecho objetivo de la inactividad del actor en el lapso consagrado en la ley para iniciar la acción. Este plazo no se suspende ni interrumpe, ya que se inspira en razones de orden público, lo cual sí ocurre en tratándose de la prescripción civil, medio éste de extinguir las acciones de esta clase.*

*En este orden de ideas y entendida la caducidad como un término para realizar, un acto administrativo que ponga fin a la actuación sancionatoria, con el objetivo de no dejar en suspenso por mucho tiempo la ejecución del acto de que se trata; de conformidad con lo antes expuesto se procederá al análisis del fenómeno de la caducidad, al amparo del artículo 38 del Decreto 01 de 1984, el cual establece:*

*“Caducidad respecto de las sanciones. ARTÍCULO 38. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas (...)”*

Igualmente, el Consejo de Estado, reiteró su posición, mediante providencia del 23 de junio de 2000, expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, en el cual precisó:

*“(…) Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que, salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades*

*administrativas para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, por lo tanto, el término se debe contar a partir del momento en que se produce el hecho infractor. (...)*

Frente al término establecido en el referido artículo, se han expuesto tres tesis en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., impartió directrices a las entidades y organismos Distritales, a través de la Directiva No. 007 de noviembre 09 de 2007, en la que señaló lo siguiente:

*“(...) Como se observa, han sido diversas las tesis expuestas en relación con el tema objeto de este documento, sin que hasta la fecha se haya generado una única línea jurisprudencial, razón por la cual se hace necesario impartir las siguientes instrucciones en cuanto al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración: “ (...) \*Teniendo en cuenta que no existe una posición unificada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa frente a la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y que la administración debe acatar el criterio que desde el punto de vista del análisis judicial genere el menor riesgo al momento de contabilizar dicho término, se recomienda a las entidades Distritales que adelanten actuaciones administrativas tendientes a imponer una sanción, que acojan en dichos procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es decir, aquella que indica que dentro del término de tres años señalado en la norma en comento, la administración debe expedir el acto principal, notificarlo y agotar la vía gubernativa<sup>6</sup>(...)” (Subrayado fuera de texto).*

Para el caso que nos ocupa, se deduce que la Autoridad Ambiental, disponía de un término de **tres (3) años**, contados a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de los hechos que dieron origen al inicio de la investigación administrativa ambiental mediante Auto 832 del 1 de abril de 2005, esto es, el **27 de enero de 2004**, por lo tanto la Administración tenía hasta el **27 de enero de 2007**, para la expedición del Acto Administrativo que resolvería de fondo la Actuación Administrativa frente al proceso sancionatorio, trámite que no se surtió; de tal modo que operó el fenómeno de la caducidad.

A su vez, la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, artículo 308, dispone:

**“RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA.** El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

*Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauran con posterioridad a la entrada en vigencia.*

*Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.*

Con forme a lo anterior, teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo que concluye mediante el presente acto dio inicio en vigencia del Decreto Ley 01 de 1984 Código Contencioso

Administrativo, se mantendrá dicho procedimiento hasta el final de la presente actuación administrativa.

### III. COMPETENCIA DE ESTA SECRETARÍA

El artículo 5° del Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la función de ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

De conformidad con lo contemplado en el numeral 6° del Artículo Segundo de la Resolución 1865 del 6 de julio de 2021, de la Secretaría Distrital de Ambiente, *“Por la cual se reasumen funciones por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente, se delegan funciones en la Dirección de Control Ambiental y sus Subdirecciones adscritas y se toman otras determinaciones”* corresponde a la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaria *“Expedir los actos administrativos que declaran la caducidad administrativa en los procesos sancionatorios”*.

En mérito de lo expuesto, la Dirección de Control Ambiental,

## RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Declarar la **CADUCIDAD** de la facultad sancionatoria que tiene la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA- respecto de los hechos que dieron lugar a la apertura de investigación mediante Auto 832 del 1 de abril de 2005, obrantes en el expediente **SDA-08-2006-1792**, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar el presente acto al representante legal, quien haga sus veces o apoderado legalmente constituido de la empresa unipersonal denominada *“DISTRIBUIDORA DISEL MARTI-SOTE. E.U.”*, ubicada en la carrera 105 No. 73 SUR -04, finca EL VOLCAN, (Nueva Dirección: Carrera 92 73 Sur -18), de la localidad de Bosa, en la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 308 de la ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO TERCERO:** Enviar copia de la presente Resolución a la Oficina de Control Disciplinario Interno, para lo de su competencia.

**ARTÍCULO CUARTO:** Cumplido lo anterior **archivar** definitivamente las diligencias contenidas en el expediente **SDA-08-2006-1792**, como consecuencia de lo previsto en el artículo primero del presente acto.

**ARTÍCULO QUINTO:** Comunicar la presente Resolución a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009; para su conocimiento y fines pertinentes.

**ARTÍCULO SEXTO:** Publicar el presente acto en el boletín que para el efecto disponga la entidad. Lo anterior en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** Contra la presente Resolución procede recurso de reposición el cual deberá interponer ante el Despacho de esta Secretaría, de conformidad con lo establecido en los artículos 50 y 51 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), en concordancia con el artículo 308 de la ley 1437 de 2011.

**NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

fecha



**CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR**  
**DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL**

**Elaboró:**

JOHANNA VANESSA GARCIA CASTRILLON      CPS:      CONTRATO 2021-1110      FECHA EJECUCION:      06/01/2022  
DE 2021

**Revisó:**

SANDRA MILENA BETANCOURT GONZALEZ      CPS:      CONTRATO 2021-1145      FECHA EJECUCION:      06/01/2022  
DE 2021

**Aprobó:**  
**Firmó:**

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR      CPS:      FUNCIONARIO      FECHA EJECUCION:      12/01/2022

**SDA-08-2006-1792**